



Para contrarrestar la crisis mundial en los países en desarrollo son necesarias mayor inversión y mayor liquidez, exentas de condicionalidades.

SETIEMBRE 23, 2009 (PITTSBURGH, ESTADOS UNIDOS). Dos de las principales redes de sociedad civil con sede en el Sur, Social Watch y la Red del Tercer Mundo, han realizado un llamamiento conjunto a los líderes del G-20 para que comprometan mayor inversión social y de asistencia al desarrollo y, asimismo, realicen una reestructuración más exhaustiva de las instituciones financieras internacionales (IFIs). Según estas redes, que representan a organizaciones de base en más de 70 países, la forma más eficaz de mitigar los drásticos impactos sociales de la actual crisis económica, así como de prevenir futuros colapsos, radica en un compromiso más profundo en el abordaje de las inequidades sociales y las asimetrías en las estructuras de las IFIs.

Social Watch y la Red del Tercer Mundo presentaron sus recomendaciones de políticas el miércoles 23 de setiembre, en el Pittsburgh Renaissance Hotel, previo al inicio de la cumbre del G-20.

Social Watch presentó las conclusiones de su Informe 2009, titulado *Primero la gente*, que contiene información de organizaciones ciudadanas de 61 países sobre los impactos sociales de la crisis y propuestas de políticas concretas de la sociedad civil sobre cómo hacer frente a la crisis de manera justa y eficaz. El informe muestra cómo la reducción de empleos, la caída en los ingresos de los fondos de pensión privados y el descenso en las remesas apareja un descenso en el estándar de vida de la población, tanto en los países ricos como en los pobres, fenómeno que no puede ser revertido en el corto plazo y sin importar los indicadores positivos que empiezan a registrarse en los mercados mundiales.

“En India, el medio millón de trabajadores que ya han perdido sus empleos debido a la crisis está presionando severamente sobre un sistema de seguridad social que ya es minimalista”, señala Amitabh Behar, co-coordinador de Social Watch India. Por otra parte, los informes nacionales de *Primero la gente* muestran cómo los países menos desarrollados del mundo, que no han tenido arte ni parte en la génesis de la crisis, están padeciendo ahora sus peores efectos, como por ejemplo Tanzania y Mozambique, que corren riesgo de perder vitales recursos de asistencia exterior que respectivamente componen 42% y 50% de sus presupuestos nacionales,

Los representantes de la sociedad civil que han aportado sus contribuciones a *Primero la gente* urgen a los gobiernos a incorporar criterios de transparencia, rendición de cuentas e inclusión en la formulación de políticas orientadas a superar los efectos de la crisis, tanto a nivel nacional como internacional. “La intervención de los gobiernos es un elemento fundamental para asegurar que haya recuperación económica; sin embargo, se deben desarrollar mecanismos que garanticen la transparencia y también el monitoreo ciudadano”, señaló Tanya Dawkins de Global-Local Links Project y Social Watch Estados Unidos. Esto es particularmente cierto en relación al G-20

ya al G-8, que son foros internacionales auto-seleccionados y carentes de estatus legal, que no tienen secretariado ni un conjunto establecido de normativas que dirijan sus procesos de toma de decisiones.

Por su parte, en su informe de políticas presentado el mismo día y titulado *Mapping the opportunities and challenges emerging from the UN Conference on the Financial and Economic Crisis* (Mapeo de las oportunidades y desafíos emergentes de la Conferencia de ONU sobre la crisis económica y financiera), la Red del Tercer Mundo (TWN) cuestiona la legitimidad del G-20, así como su transparencia, sistema de rendición de cuentas y contenido. El TWN, un *think-tank* del Sur, argumenta que es insuficiente y fallida la principal estrategia del G-20 para aumentar la liquidez en los países que sufren los impactos de la crisis, consistente en la asignación de 1,1 billones de dólares en recursos frescos a las instituciones de Bretton Woods debido a que, a cambio de estos recursos, no se han exigido las sustanciales reformas de políticas y gobernanza que son imprescindibles. Específicamente, los países en desarrollo y de bajos ingresos deberían estar en condiciones de acceder a estos fondos sin tener que cumplir con condicionalidades pro-cíclicas (tales como recortes salariales para los trabajadores del sector público y congelamiento de los sistemas de pensión), lo que les daría un margen mayor para impulsar la demanda interna.

TWN destaca que, a diferencia de las últimas dos cumbres del G20, la Conferencia de Naciones Unidas sobre la Crisis Financiera y Económica Mundial que tuvo lugar el pasado junio abordó la crisis del desarrollo dentro de la actual crisis financiera. El documento resultante de la Conferencia de ONU, además de urgir a aumentar el espacio de políticas para los países en desarrollo que están siendo severamente afectados por las medidas proteccionistas de los países ricos, enfatizó la necesidad de controles de cuentas de capital y también de una asistencia financiera a los países en desarrollo que no esté atada a las condicionalidades económicas pro-cíclicas que, a fin de cumplir con los pagos de deuda externa y garantizar la confianza de los inversores, exacerban las recesiones económicas y agravan la pobreza.

Además, se debería disponer otro billón de dólares para países de bajos ingresos a través de Derechos Especiales de Extracción y nuevos mecanismos que no generen deuda, a fin de que puedan poner en marcha los paquetes de estímulo que tanto necesitan. También se necesitan medidas que prevengan el resurgimiento de la crisis de deuda que ha plagado a muchos de estos países, incluyendo cancelaciones totales o parciales y congelamientos inmediatos de deuda, y el establecimiento de un panel internacional de evaluación y arbitraje de deuda. Según Bhumika Muchhala de TWN, “se deben realizar reformas significativas al marco y principios de los actuales mecanismos de renegociación de deuda, a fin de que la crisis no penalice por partida doble a los países de bajos ingresos al sobrecargarlos con niveles insostenibles de deuda soberana”.